

COMENTARIOS SOBRE LAS REFORMAS A LA LEY DE EXTRADICIÓN INTERNACIONAL

Miguel Ángel Lugo Galicia

Resulta muy evidente que las reformas a la Ley de Extradición Internacional están influidas por la importante problemática del caso Álvarez Machain, que, como bien se recordará, se propició supuestamente, de acuerdo a la versión de las autoridades norteamericanas, por la «indolencia» del gobierno mexicano para actuar en el caso Camarena Salazar; una apreciación anodina, pertinentemente rebatida por los expertos mexicanos y norteamericanos que señalaron el camino correcto para proceder, es decir, ajustarse a las normas establecidas por el tratado de extradición aplicable al caso concreto.

Si existía una presunta incuria en el actuar de nuestro gobierno, habría que remediarla a través de reformas constitucionales y legales que lo capacitaran para actuar con rapidez en el ataque a problemas de delincuencia institucionalizada. Así, desde el año pasado se cristalizaron importantes reformas a nuestra Constitución, que facilitan el combate contra el llamado «crimen organizado», y se dieron encuentros entre servidores públicos de alto rango, como la reunión del entonces procurador Carpizo con su homóloga estadounidense Janet Reno, a fin de sentar bases para una amplia cooperación institucionalizada y una necesaria revisión a los respectivos tratados de extradición.

De esta manera, las reformas publicadas en el **Diario Oficial** del 10 de enero de 1994 son perfectamente naturales y dan margen para algunos comentarios. El hecho de que la extradición pueda proceder por delitos culposos revela la preocupación del gobierno; porque

cualquier tipo de incidente internacional, de naturaleza penal, puede tener amplias repercusiones, que preferiblemente deben manejarse en el marco de un acuerdo institucional y no a través de prácticas *sui generis*, como la de los caza-recompensas, o del círculo permeable, no siempre selectivo, de la información periodística. A estas consideraciones también cabe agregar un hecho cierto: la idea de «delitos culposos graves», así como en su momento lo ha sido la del «crimen organizado», deja un gran reto que debe ser resuelto con toda claridad por la doctrina y legislación penales, en el entendido de no dejar totalmente sujeto a la especulación y al buen criterio del juez un problema que puede ser especialmente delicado. Asimismo, hay que tener presente esta innovación para plasmarla en los tratados de extradición individualmente considerados.

Siguiendo con este breve análisis de las reformas, llama la atención que en esta Ley de Extradición Internacional el gobierno mexicano claudique de su tradición posición en contra de la pena de muerte. Se dice ahora que es aceptada la extradición cuando en la legislación del estado requirente se establezca la pena máxima, siempre y cuando se conmute o se sustituya esa pena. Si esto es así, entonces cae por tierra aquella enérgica disposición que le daba al gobierno mexicano la posibilidad de rehusarse a conceder la extradición, que podemos encontrar en el tratado con Estados Unidos, cuando se contempla la posibilidad de la pena máxima, lo que obliga a pensar que, de una vez por todas, debería aclarar el gobierno mexicano su posición respecto del problema, con una reforma al artículo 22 constitucional; en caso contrario, de persistir la posición ambigüedad, es preferible dejar a un lado la retórica abolicionista.

Se podría decir que con estas nuevas disposiciones, México también tiene la posibilidad de rescatar a muchos connacionales de la eventualidad de una ejecución sin embargo, considerando que nuestro país resulta ser la parte débil en asuntos de extradición, además de que los jueces extranjeros suelen ser muy celosos guardianes de sus respectivos derechos, aunque se violenten principios internacionales,

como en el caso Álvarez Machain, entonces tenemos que dicha posibilidad no es muy viable para México, lo que nos lleva a sugerir que en las revisiones de tratados de extradición individuales no se soslaye el ejemplo del artículo 8 del todavía vigente convenio con los Estados Unidos.

Para concluir estos breves comentarios, cabe señalar: resulta positivo que la Ley de Extradición Internacional ponga límites a situaciones que se pueden prolongar indefinidamente, frustrando la necesidad de que el trámite de extradición se haga en forma expedita. Así, se deja claro que el reclamado o su legítimo representante tienen, un término de 15 días para interponer amparo, impugnando la resolución que conceda la extradición. En reciprocidad, y de manera notable, también se deja claro que cuando el Estado solicitante deja pasar 60 días naturales desde el día siguiente en que el reclamado quede a su disposición sin hacerse cargo de él, éste recuperará su libertad y no podrá volver a ser detenido ni entregado al propio Estado, por el mismo delito que motivó la solicitud de extradición, una mejora notable y que ojalá pudiera aplicarse en el seno de nuestro sistema penal, en el que son frecuentes las violaciones a garantías individuales por demora en los plazos exigidos por la Constitución y la Ley.